Selección de Ejecutorias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Materias Civil, Mercantil y Administrativa

(Trimestre Julio-Septiembre de 1942)

SALA CIVIL

Abandono de hogar, divorcio.—Para que el abandono de hogar constituya causal de divorcio se requiere que el supuesto de la norma sea un período que exceda de seis meses, pero no que este lapso sea aproximado. Deben, pues, aportarse al juicio datos positivos que justifiquen este hecho fundamental. Amp. 558/942. Eufemia García de Sepúlveda.

Actos consentidos. Improcedencia de Amparo.—El amparo es improcedente contra actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos, a no ser que sean por sí solos, violatorios de garantías. Por ello el aperebimiento de arresto es consecuencia del requerimiento de entrega de dinero, que fué consentido. (Véase la jurisprudencia ya establecida en el Apéndice al Tomo LXIV del Semanario Judicial de la Federación, pág. 20). Toca 9387/941. “La Esperanza”, S. A.

Adulterio como causal de divorcio. Prueba del.—Si en el juicio se ha acreditado mediante las declaraciones de testigos que han tenido relación sexual con la cónyuge, y el Juez ha atribuído pleno valor probatorio a las mismas, no ha habido violación de garantías, pues no se infringen las normas reguladoras de la prueba. Amp. 1936/941. Belem Galván.

Albacea, terminación del cargo de.—Los cargos de albacea e interventor de una Sucesión acaban por la terminación natural de la misma, según la fracción I del artículo 1745 del Código Civil y habiéndose comprobado que

hubo adjudicación de los bienes hereditarios otorgándose la escritura correspondiente antes de la interposición del amparo, carece de personalidad el albacea para promover el juicio de garantías. (Art. 73, frac. XVIII en relación con el 4º de la Ley de Amparo). Amp. 7645/938. Soledad S. de Kubli.

Apelación.—Según el capítulo especial de la Justicia de Paz del Código de Procedimientos del Estado de Nayarit, las sentencias pronunciadas por los Jueces Menores y de Paz pueden ser recurridas en apelación ante el Juez de Primera Instancia, el que tiene facultades, como Tribunal de alzada, para hacer nueva valoración de pruebas y estimación de las mismas. Toca 7235/39. Amparo de Ricardo E. Méndez.

Apelación.—La autoridad que conoce de la apelación no puede tomar en cuenta violaciones que no se hacen valer en los agravios y menos aún cuando no se hace expresión de los mismos, sino que el apelante se limita a interponer la apelación. Si en tal caso la autoridad revoca la sentencia del inferior, su resolución es contraria a las disposiciones procesales. Toca 5910/940. Antonio Arandaño Sr.

Apelación extraordinaria.—Si no se interpone juicio de amparo contra la ejecutoria que declara improcedente dicho recurso, se aceptan por anticipado las consecuencias de la misma (embargo de bienes) por lo que es improcedente el juicio de garantías contra la orden de ejecución. Toca 2090/942. Bernardo Tajfeld.

Audiencia de fijación de litis.—Cuando en la demanda no se precisan con claridad los puntos cuestionados, si éstos han quedado aclarados en la audiencia de fijación de litis, deben ser materia de la sentencia que se dicte, y no puede afirmarse que tales puntos no sean motivo de la demanda, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 219 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz. Amp. 7434/940. Pomposa Milory Vda. de Junco.

Bienes del domicilio conyugal.—La Ley de relaciones familiares declara inembargables los bienes pertenecientes a la morada conyugal, por lo que, promovido el incidente de exclusión, el juez no puede dictar sentencia de remate mientras no se resuelva dicho incidente. Amp. 6281/1933/1º. Ignacio Jiménez.

Bienes de sacerdotes.—Si bien es cierto que deben entrar al dominio de la Nación, según lo dispone la fracción II del artículo 27 Constitucional, cualesquiera bienes raíces poseídos por interpósitas personas de las asociaciones religiosas denominadas iglesias, así como los edificios construidos o destinados a la administración, propaganda o enseñanza de un culto religioso, sin embargo, es posible que un sacerdote sea propietario de un inmueble sin ser necesariamente interpósita persona de la iglesia a que pertenece, porque los sacerdotes, individualmente considerados, ni tienen incapacidad para adquirir bienes raíces, ni representan a la asociación religiosa denominada Iglesia Católica. Toca 620/35. Josefina Martínez.

Caducidad de la acción cambiaria.—La acción cambiaria directa, que es la que se deduce contra el aceptante de un título de crédito, no se perjudica por falta de protesto, requisito exigible tan sólo para la acción cambiaria en

vía de regreso. No son aplicables, por tanto, los preceptos de la Ley de Títulos y de Operaciones de Crédito relativos a la caducidad, a la acción deducida contra el aceptante. Amp. 6082/941. Teodora Aragón.

Caducidad de la instancia. Código de Procedimientos Civiles del Estado de Guanajuato.—Conforme el artículo 383, fracción IV del Código de Procedimientos Civiles, el proceso caduca cuando no se haya verificado ningún acto procesal o promoción durante un término continuo mayor de ciento ochenta días hábiles contados a partir de la fecha en que se haya verificado el último acto procesal o hecho la última promoción. Si en la especie únicamente se presentó una simple promoción para devolución de un documento, es evidente que se ha operado la caducidad en los términos del precepto citado, ya que no se hizo promoción tendiente a la continuación procesal, pues la que se hizo no está encaminada a la definitiva terminación del pleito. Toca 6722/941. J. Socorro Martínez.

Cateo.—Si se consiente voluntariamente por el sujeto pasivo con el fin de evitarse la rotura de puertas y cerraduras, implica de todas maneras una molestia reclamable en el juicio de amparo. Toca 2945/42. Luz García Figueroa Vda. de Ariza.

Condena de costas. Juicio ejecutivo.—La calificación de temeridad queda al prudente arbitrio del Juez cuando no hay otros motivos para imponer las costas; pero cuando hay precepto expreso, como en el caso de juicio ejecutivo la fracción III del artículo 140 del Código de Procedimientos Civiles que impone las costas, es incuestionable que su falta de aplicación es violatoria de garantías. Amp. 5086/941. Rodolfo Carrillo.

Costas.—Cuando con fundamento en una ejecutoria de la Corte, la autoridad responsable deba modificar su sentencia, no tiene obligación de condenar en costas al tercero perjudicado, y menos cuando en la ejecutoria no se haga referencia a costas. Queja 325/1942. Eladio Martínez Pando.

Costas.—Cuando la sentencia de segunda instancia es conforme de toda conformidad con la primera, la autoridad que conoció en la segunda instancia debe condenar en costas, máxime cuando se trata de juicio ejecutivo mercantil por prever el Código de Comercio que siempre se condene en costa en los juicios ejecutivos mercantiles. Amp. 1256/38/2ª, José Riba.

Culto Religioso.—Para los efectos del artículo 27 de la Constitución en su parte relativa, hay que notar que habla de culto religioso, no de religión, y es claro que por más que existan innegables conexiones entre los dos conceptos significados por las dos expresiones, median entre ellos diferencias substanciales que no permiten confundirlos. Una religión es un sistema de doctrina inspirada en el fundamental propósito de procurar la elevación moral de sus adeptos y su felicidad principalmente ultraterrena. El culto se constituye por ceremonias, por prácticas rituales, que sirven para afianzar los postulados predicados por la doctrina, pero que no son la doctrina misma. Así pues, no cabe la nacionalización de una finca que no esté destinada a la propaganda o enseñanza de algún culto religioso, por más que haya servido para enseñar, junto con otras ciencias o artes, la religión católica. Toca 620/35. Josefina Martínez.

Depositario, carácter del.—Cuando una Cooperativa garantiza un préstamo con la prenda de todos sus bienes en favor de la Institución que hace el préstamo y se constituye depositaria a la propia cooperativa, con posterioridad se embargan bienes de la deudora, por crédito diverso y el Interventor de la Institución hace señalamiento de bienes nombrándose depositario a uno de los miembros del consejo de la Cooperativa en lo personal, éste no puede incurrir en las penas de los depositarios infieles si hace entrega de los bienes embargados al nuevo depositario nombrado por el Juez, puesto que el acreedor prendario constituyó depositaria de los bienes a la deudora y el depositario requerido para la entrega de los bienes, fué nombrado en lo personal y no como funcionario de la Cooperativa. Toca 5141/41/1^o. Miguel Vargas Márquez.

Divorcio. Domicilio conyugal para el efecto del.—La estancia accidental de un cónyuge en lugar distinto del domicilio del demandado demuestra que el emplazamiento infringe las disposiciones legales relativas, y se violan consiguientemente las garantías constitucionales. Por otra parte, la Jurisprudencia sustentada por esta H. Suprema Corte de Justicia de la Nación dice: "si se prueba que el domicilio del demandado está fuera de la jurisdicción del Juez que conoce el juicio de divorcio y la notificación o emplazamiento para comparecer al juicio ha pretendido hacerse mediante la publicación del Edicto respectivo, debe concluirse que por no haberse hecho notificación personal fué ilegalmente citado para intervenir en el procedimiento y, por consiguiente, no pudo ser oído en el mismo, violándose con ello, en su perjuicio las garantías del artículo 14 Constitucional, siendo procedente, por lo tanto, concederle la protección federal". (Tesis Núm. 600 publicada en el Apéndice al Tomo LXIV del Semanario Judicial de la Federación). Toca 1142/942. Emma Couchette Tourrés.

Embargo.—Corresponde al quejoso probar que los bienes embargados no son de propiedad del demandado sino de persona extraña. Toca 2473/942. Carlos del Campo y coagraviados.

Embargo de salarios de trabajadores.—La prevención hecha por autoridad judicial a una empresa para retener a su disposición el fondo de ahorros de un trabajador, es contraria al espíritu de los artículos 95 y 91 en relación con el 86 de la Ley del Trabajo, ya que conforme a estas disposiciones el patrón no está obligado a cumplir orden judicial o administrativa relativa a embargo de salarios de sus trabajadores, y el caso no se halla comprendido dentro de las excepciones en que el patrón puede hacer retención, descuento o embargo de salarios; y, por otra parte el artículo 95 faculta a los patronos para desobedecer órdenes que tiendan a desconocer los derechos de los trabajadores. Existe, por consiguiente, interés jurídico de parte de la empresa quejosa, en cumplir con los preceptos citados de la Ley del Trabajo, pues tiene la obligación de impedir el secuestro y retención de salarios que en el caso es el fondo de ahorros indicado. (Véase asimismo, casos análogos al presente, resueltos por esta Sala Civil. Tocas 689/941; 1915/941; 8003/941; 8041/941 y 7607/941 relativos a amparos interpuestos por "Petróleos Mexicanos"). Toca 4025/941. Petróleos Mexicanos.

Facturas.—Cuando la prueba documental privada, consistente en facturas, esta adminiculada con la declaración de testigos, merece fe. Toca 2774/942. J. Guadalupe Ramírez. (Véase T. XXVII, pág. 1233. Semanario Judicial de la Federación).

Fianzas en el arrendamiento.—Para que se pueda cobrar rentas al fiador, no es suficiente que se pruebe que fué dada la fianza y que la casa fué desocupada por el inquilino en determinada fecha, sino que debe probarse que éste no pagó las prestaciones demandadas. Toca 7737/1936/1^º. Luis Armas Farias.

Informe justificado, efectos de la falta de.—De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 149 de la Ley de Amparo, la falta de informe justificado por la autoridad responsable, determina la presunción de certidumbre del acto reclamado, pero no de la violación de garantías, por lo que queda a cargo del quejoso la prueba de los hechos que determinan su inconstitucionalidad, o sean. en el caso, las circunstancias de que el promovente, extraño al juicio en que se ordenó el remate, es propietario y poseedor del inmueble objeto de la subasta. Toca 3123/942. Rosalío Uribe.

Juicio hipotecario.—Debe intentarse contra el propietario del bien hipotecado y un tercero que no sea poseedor a título de dueño, no puede alegar violaciones, más cuando no prueba su calidad de poseedor. Amp. 3336/42/2^º, Ernesto J. Flores.

Medios de apremio.—De acuerdo con el artículo 146 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua, el auxilio de la fuerza pública y el cateo pueden decretarse sin previa advertencia o prevención a la persona a quien se quiere obligar a obedecer una determinación judicial, pero cuando se trata de multa y de arresto, debe prevenirse a la persona que si no acata la correspondiente resolución judicial, se hará acreedor a la multa o arresto referidos; y es necesario que conste de manera indubitable que la persona conoce la pena a que se expone. Toca 2167/942. Alberto Castillo.

Mora.—En las obligaciones a plazo, el deudor se constituye en mora por el vencimiento de aquél, sin que sea necesaria interpelación, y si constituido en mora un obligado el acreedor admite una substitución de deudor, esto no significa que se conceda un nuevo plazo, y el nuevo deudor estará en mora como su antecesor. Toca 2899/40/1^º Alfonso Cárdenas Valdez y coagraviados.

Mujer casada.—De acuerdo con la legislación civil del Estado de Puebla, la mujer casada no puede comparecer en juicio, a menos que se obtenga el permiso del esposo, ya que éste es el representante legal de aquélla; pero cuando se inicia juicio ejecutivo contra la esposa, basado en un título de crédito, la mujer sí puede y debe comparecer en juicio, porque el artículo 2^º de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su fracción VI, establece en esta materia la supletoriedad del Código Civil del D. F. y de acuerdo con este Ordenamiento (Art. 172) el marido y la mujer, mayores de edad, tienen capacidad para administrar, contratar y disponer de sus bienes propios y ejercitar las acciones u oponer las excepciones que les corresponden sin que requiera el consentimiento de otro cónyuge. Toca 5789/41/1^º Micaela G. de Besnier.

Mutuo.—El mutuo no está comprendido por el artículo 54 de la Ley de Herencias y Legados del D. F., pues en este caso el deudor no tiene en su poder ningún bien o valor del acreedor fallecido, ya que el mutuante transfirió la propiedad de dinero o cosas fungibles. Toca 584/41/2* Alfredo Lama Bivera.

Nacionalización.—No basta la existencia de comunicaciones y menos todavía cuando dichas comunicaciones están tapiadas entre el predio y un templo contiguo para deducir que el primero sea o haya sido un anexo del segundo. Toca 620/935. Josefina Martínez.

Notificación de la demanda.—Cuando no se encuentra la persona que deba ser notificada, el Actuario deberá cerciorarse de que ésta vive en el domicilio donde se hace la notificación, asentando la dirección donde se deja la cédula y el nombre de la persona que la recibe. Careciendo de estos datos, no se identifica la casa en que pretendió el Actuario hacer el emplazamiento, ni la persona con quien entendió la diligencia y se comete violación de garantías. Toca 9950/941. Francisco Paillés.

Notificaciones personales.—No pueden hacerse el mismo día en que se dictan, puesto que deben publicarse en el Boletín Judicial. Por otra parte, si el acta de notificación asienta que en la misma fecha se notificó al interesado en auto de fecha diez de diciembre último, esto hace creer fundamentalmente que por lo menos había terminado el mes en que se dictó la resolución, pues de lo contrario se debería decir del mes en curso. Toca 3336/42/2* Ernesto J. Flores.

Novación.—El simple cambio de deudor no constituye novación de la obligación y tampoco prórroga del plazo del crédito pues para que haya novación se requiere que se pacte expresamente. Toca 2899/40/1* Alfonso Cárdenas Valdez y coagraviados.

Poseción, presunción de.—La Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, ha sentado la tesis de que una escritura de compra-venta de inmuebles implica la presunción de posesión en favor del comprador, si no es controvertido el título mismo; y tratándose de la propiedad el amparo es procedente para hacer respetar la garantía de audiencia consignada en el artículo 14 Constitucional. Toca 3123/942. Rosalfo Uribe.

Poseción, prueba de.—Es infundado estimar que la posesión sólo se prueba por medio de testigos o confesión, ya que conforme a la Jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, publicada en la página 112 del Apéndice al Tomo XLIV del Semanario Judicial de la Federación, las escrituras públicas constituyen prueba de propiedad y traen la presunción de ser el comprador poseedor de los bienes relativos, presunción que sólo puede ser destruida por los medios legales. Amp. 7055/940. J. Manuel de Alba.

Promesa de venta.—De acuerdo con la legislación de Coahuila, para que tenga pleno valor y surta efectos contra tercero, debe ser ratificada ante notario e inscrita en el Registro Público. Amp. 2899/40/1* Alfonso Cárdenas Valdez y coagraviados.

Pruebas.—De acuerdo con la Jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia la apreciación que el Juzgador haga de las pruebas rendidas en el juicio, conforme a sus facultades legales, sin violar las leyes que determinan su valoración y sin alterar los hechos ni vulnerar las reglas lógicas de la deducción, no puede ameritar la concesión del amparo. Toca 9221/41. Arnulfo Cedeño.

Reconocimiento de firma.—El reconocimiento que un padre hace de la firma de su hijo, debe acompañarse de la prueba de la minoridad de éste y de la circunstancia de que firma como representante legal del hijo. Amp. 1733/933. El Palacio de Hierro. S. A.

Recurso de queja.—Contra las resoluciones dictadas en ejecución de una sentencia de amparo, no procede el juicio de garantías sino el recurso de queja establecido en la fracción V del artículo 95 de la Ley de Amparo. Toca 3089/942. Bienes Urbanos “La Imperial”, S. A.

Recurso de queja.—No puede interponer este recurso un tercero por defecto de ejecución de una sentencia que ampara a su colitigante; y, por otra parte, no puede discutirse en la queja los fundamentos de la ejecutoria de amparo que han quedado firmes, tales como la apreciación de las pruebas. Amp. 231/942. Juan Violante.

Reivindicación.—El actor puede fundar su demanda alegando como título la prescripción, siempre que su posesión haya reunido los requisitos para usucapir. Amp. 7345/1936/1ª Francisco Arroyo García.

Revisión.—Al pedirse la revisión de una sentencia dictada por un Juez de Distrito, deben expresarse las violaciones que cometió éste al dictar su fallo. Amp. 8170/41/2ª J. Ascensión Cortés.

Sobreseimiento.—El hecho de haberse decretado no significa que se revoque la resolución que dió entrada a la demanda de amparo. Toca 1833/42. Luis G. Almada.

Tercera. Propiedad de los semovientes, prueba de.—Conforme a los artículos 1º, 7º, de la Ley de Ganadería del Estado de Chihuahua, todos los criadores y dueños de animales tienen la obligación de herrar a éstos a fin de justificar por este medio su propiedad; los animales herrados y las crías que siguen a las hembras se reputan del dueño del fierro, si estuviere éste debidamente registrado. Amp. 2485/33. Chikre Abbud.

SALA ADMINISTRATIVA

Actos aparentemente negativos.—Si los actos reclamados, aunque aparentemente negativos, tienen efectos positivos, procede conceder contra ellos la suspensión, dentro de los términos previstos por la Ley de Amparo, a fin de que las cosas permanezcan en el estado que guardan, hasta que se dicte sentencia definitiva en cuanto al fondo. Toca 5713/42/1ª Fumigaciones Nacionales, S. A.

Afectaciones agrarias, improcedencia del amparo contra las mismas.—La fracción XIV del artículo 27 Constitucional excluye al poder judicial del conocimiento de toda controversia que pudiera suscitarse contra las resoluciones presidenciales dotatorias o restitutorias de tierras y aguas, aún respecto de aquellas cuya inconstitucionalidad se hiciera derivar de la afectación de una pequeña propiedad agrícola. Toca 4403/41/1^º Felipe J. Martínez y coagraviada. (La misma tesis se sustentó en Tocas 5854, 5855, 5856 y 5858 de 1940; 3687, 7095 y 8574 de 1941; 1933, 3524, 4231 y 4635 de 1942).

Véanse: **Amparo en materia agraria, Inafectabilidad y Resoluciones agrarias.**

Alcoholes, como debe computarse el tiempo de elaboración.—Si el proceso de elaboración no termina sino hasta que el producto sale del rectificador, no puede pretenderse que el término de elaboración deba computarse atendiendo solamente al plazo concedido para el funcionamiento del alambique. Si la Junta Técnica señaló un término para el funcionamiento del alambique y otra para el rectificador, es indudable que debe atenderse a ambos plazos, esto es, para determinar si la elaboración se ajustó estrictamente a los permisos concedidos, debe precisarse el tiempo que funcionaron tanto el alambique como el rectificador y sea que los dos aparatos hayan funcionado dentro de los plazos concedidos, de todas maneras el impuesto debe calcularse sobre el alcohol que sale del rectificador y no sobre el aguardiente que produce el alambique. Toca 1687/42/1^º Compañía Industrial Morelense.

Alcoholes, impuestos sobre.—La Ley relativa no grava la venta o comercio de alcohol procedente de fuera de la República, puesto que la misma ley se refiere a la elaboración de aguardiente y el impuesto de venta de primera mano grava sobre el alcohol; de donde se infiere que los artículos de importación no son productos gravados por la Ley de la materia y, por ende, el porteador de los mismos no puede decirse que transporte un producto gravado por la Ley, que lo obligara en los términos del artículo 106 del Reglamento. Toca 3153/42/1^º Gustavo Ríos San Martín.

Alcoholes, quienes causan el impuesto por expendio.—Los establecimientos que expenden bebidas alcohólicas, aunque sea accidentalmente, deben ser considerados como causantes del impuesto, porque de acuerdo con el artículo 2^º de la Ley de la materia, se considera como expendio todo lugar en que aquellos artículos se enajenan, cualquiera que sea la forma en que la venta se realice. Toca 3276/42/2^º Club Social "Unión y Progreso".

Amparo en materia agraria, casos en que procede.—Los actos de ejecución llevados a cabo por las autoridades inferiores en contravención a lo dispuesto por las resoluciones presidenciales de dotación, ampliación o restitución de ejidos, cuando ya existe una declaración mandando respetar la pequeña propiedad, sí pueden ser reclamados por la vía de amparo, porque no quedan dentro de la materia que la Ley subtrae al conocimiento de la autoridad judicial federal. Toca 6952/40/2^º Mariano Moreno. (V. 4643 de 1940 1^º, y 3512/41/2^º).

Bonos de caminos, no causan impuesto sobre la renta.—Es aplicable a los bonos de caminos emitidos por el Estado en mil novecientos treinta y siete,

el penúltimo párrafo del artículo 21 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y, por lo tanto, están exentos de la cuota progresiva del impuesto, ya que se trata de una emisión hecha en los términos de los artículos 208 a 228 de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito y ser, además, de aquellas a que se refiere la Ley General de Instituciones de Crédito. Toca 2449/41/1ª Compañía Mexicana de Caminos.

Buques, distribución de su cupo.—De acuerdo con el artículo 4º del Reglamento sobre Artículos de Consumo Necesario, compete a la Secretaría de la Economía Nacional la distribución de los artículos de consumo necesario para evitar que suban de precio y que determinadas regiones del país carezcan de ellos, pues de lo contrario, sobrevendría una situación anómala, con grave perjuicio, sobre todo, de las clases necesitadas del país; y para llenar tal finalidad, es indispensable que dicha Secretaría esté facultada para distribuir el cupo de los barcos que efectúan el servicio de transporte de una región a otra de la República, con el fin de que se cumpla la finalidad de la ley, no obstante que de manera expresa no se establezca esa facultad. Toca 2883/42/1ª Sociedad Cooperativa de Transportes Marítimos y Fluviales, S. C. L.

Cámara Nacional de la Industria de Transformación, acuerdo que la crea.—Debe negarse la suspensión definitiva contra el acuerdo por el que aprobaron los estatutos y se autorizó la constitución de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación, porque tal acuerdo produce diversos efectos que son precisamente los que el interesado quiere que se suspendan; pero afectaría el interés general, que en el caso radica en que la Cámara Nacional de la Industria de Transformación, se constituye como un órgano de la mencionada actividad, y al mismo tiempo, como un órgano asesor de la Secretaría de la Economía Nacional, en todas las cuestiones técnicas que se refieren al desarrollo de la industria, de manera que si se concediera la suspensión se quebrantaría lo dispuesto en la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo, ya que no sería conveniente que al través de esa medida se permitiera al interesado oponerse a esos propósitos que informan el acto reclamado. Toca 3740/42/2ª Cámara de Comercio de Uruapam, Mich.

Carreteras, control.—Todas aquellas disposiciones que reglamentan el tránsito de vehículos en las carreteras nacionales y particulares de concesión federal, tienden a proteger los intereses de la colectividad, de tal suerte que el impedir su observancia, puede traer consigo perjuicios al interés general que descansa esencialmente en la seguridad del transporte y de la vida de las personas que viajan por las carreteras, de manera que es indispensable para que esas disposiciones llenen su objeto, el que sea necesario controlar o vigilar el tránsito de todos los vehículos que circulen por esas vías, para lo cual es preciso que obtengan los permisos correspondientes; en tal virtud, si se concede la suspensión se quebranta lo dispuesto en la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo. Toca 4134/42/2ª Gunther Ricardo Sieveos.

Constitucionalidad de leyes, autoridades competentes para conocer.—La Jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, sobre que no existe la obligación de agotar los recursos ordinarios establecidos en la ley del acto, cuando se reclama principalmente la anticonstitucionalidad de ésta, ya que sería

contrario a los principios de derecho el que se obligara a los quejosos a que se sometieran a las disposiciones de esa ley, cuya obligatoriedad impugnen por conceptuarla contraria a los textos de Constitución, evidentemente se refiere a los casos en que se impugna por inconstitucional toda la ley o al menos los recursos en ella establecidos; pero no a los casos en que solamente uno de los impuestos existentes en la Ley es tachado de inconstitucional. En cuanto a la jurisprudencia sobre la misma materia, sobre que no es necesario agotar previamente los recursos señalados por la ley del acto para venir al amparo contra dicha ley, puesto que no son las autoridades comunes a quienes compete resolver si una ley es contraria o no a la Constitución de la República sino a la Justicia Federal, es inaceptable; pues cuando la autoridad administrativa aplica una ley inconstitucional, su acto de ejecución desconoce la supremacía de la Constitución; en otros términos, la autoridad no pudo, sin desacato de la Constitución, aplicar una ley contraria a la misma; pero la querrela constitucional que surge con tal motivo no debe ser llevada al punto y sin más trámite ante la autoridad judicial, por medio de juicio de amparo, sino que previamente debe darse oportunidad a la propia autoridad que se supone violadora de la Constitución para que enmiende su violación; esa oportunidad la tiene con el empleo de recurso ordinario. Sólomente cuando la ley secundaria no consagre el recurso o cuando agotado el mismo no se obtuvo la reparación, el perjudicado puede acudir al remedio excepcional del amparo. Toca 2364/40/2ª María Ochoa y coag. (V. Toca 7633/41/1ª).

Demanda de amparo, ante quién debe presentarse.—En los lugares en que no resida Juez de Distrito, los Jueces de Primera Instancia dentro de cuya jurisdicción radique la autoridad que ejecuta o trate de ejecutar el acto reclamado, tienen la facultad de recibir la demanda de amparo, para los efectos a que se contrae el artículo 38 de la Ley relativa; aunque sólo pueden suspender provisionalmente el acto reclamado, cuando se trate de los actos a que expresamente se refiere el artículo 39. Toca 4206/42/2ª Noé Garza.

Departamentos jurídicos, funciones.—Los Departamentos Jurídicos dependientes de las Secretarías de Estado, no tienen el carácter de autoridad, por ser órganos de consulta y sus dictámenes y actos carecen de imperio, característica de los actos provenientes de autoridad. Toca 3670/42/2ª Atanasio Sandaval.

Drogas, enervantes, competencia para prohibir su prescripción.—El Departamento de Salubridad Pública puede suspender la facultad de prescribir drogas enervantes, a los médicos y demás profesionistas autorizados, por el tiempo que estime conveniente, cuando no se le acredite, en casos concretos, que haya habido necesidad de prescribir narcóticos; pero tal atribución no abarca los casos de suspensión por tiempo ilimitado, ni tampoco los de fijación del número de recetas durante un año. Toca 2787/42/1ª Jules Michael Flamant.

Ejecutorias, incumplimiento de por medio de leyes.—Si bien es cierto que la derogación lisa y llana, sin la expedición de otra ley que reproduzca sustancialmente los conceptos de aquella contra la cual se concedió la protección constitucional, implica el acatamiento de la sentencia de amparo, también es

verdad que ésta resulta desobedecida y el acto reclamado repetido, a pesar de la derogación, si se expide una ley nueva substancialmente igual a la derogada por virtud del amparo. Queja 165/41/A. Compañía Vinícola de Orizaba, S. de R. L.

Fianza, período que garantiza.—Cuando no se dan por tiempo determinado o plazo fijo, se entiende que la fianza existe mientras subsista la obligación cuyo cumplimiento está garantizado, y no puede considerarse legalmente cancelada mientras no se cancele la obligación misma. Toca 4039/42/1ª Compañía de Fianzas México, S. A.

Facultad discrecional de las autoridades fiscales para imponer multas.—La levedad de las infracciones no tiene un carácter objetivo, sino que, por el contrario, la determinación de si una infracción es grave o leve, queda sujeta al criterio discrecional de la autoridad fiscal a quien compete sancionarla con la multa correspondiente. Ahora bien, el uso de la facultad discrecional supone un juicio subjetivo de la autoridad que la ejerce. Los juicios subjetivos escapan al control de las autoridades judiciales federales, toda vez que no gozan en el juicio de amparo de plena jurisdicción, y por lo mismo no pueden substituir su criterio al de las autoridades responsables. El anterior principio no es absoluto, pues admite dos excepciones, a saber: cuando el juicio subjetivo no es razonable sino arbitrario y caprichoso; y cuando notoriamente es injusto e inequitativo. En ambos casos no se ejercita la facultad discrecional para los fines con que fué otorgada, pues es evidente que el legislador no pretendió dotar a las autoridades de una facultad tan amplia que a su amparo se lleguen a dictar mandamientos contrarios a la razón y a la justicia. Toca 3090/42/2ª Fomento Industrial y Mercantil, S. A.

Fianza, extensión.—Las fianzas se constituyen para determinado objeto, quedan sujetas a sus términos y no pueden extenderse sus efectos a otras cantidades o a otros hechos ejecutados en épocas distintas de las que comprendan. Toca 1542/41/2ª Compañía Mexicana de Garantías, S. A.

Honores a los Veteranos de la revolución, como deben considerarse.—No deben considerarse como derechos eminentemente políticos, los honores conferidos a los miembros de la Legión honorífica “Veteranos de la Revolución”, organizada y reconocida oficialmente por la Secretaría de la Defensa Nacional. Toca 2131/32/1ª Joaquín F. del Valle.

Inafectabilidad agraria, fecha en que debe solicitarse.—El Código Agrario no fija de manera clara el momento ni el término en el cual el propietario de una finca afectable deba presentar su solicitud de inafectabilidad, existiendo tal derecho en favor de los afectados y debiendo resolverse previamente a la dotación definitiva de ejidos, siempre que haya presentado la solicitud ante la Comisión Agraria Mixta antes de que se efectúe la dotación. Toca 640/42/2ª Carlos Rivas Valera.

Inmigrantes inversionistas. Garantía subsidiaria.—Atentos los términos del artículo 88 de la Ley General de Población, se requieren dos condiciones, entre otras de carácter personal, para que los extranjeros puedan adquirir la condición de inmigrantes inversionistas; capital determinado, debidamente

comprobado y garantizado, para invertir en el país en el lapso de seis meses a partir de la fecha de entrada, inversión que también debe ser garantizada con el carácter de permanente, mediante un depósito que debe subsistir conforme a las Tablas Diferenciales ahora vigentes, parcialmente hasta que haya transcurrido el término de cinco años fijados para la admisión condicional. En estos términos, es claro que lo que se garantiza con el depósito, distinto del capital invertible, pues éste se devuelve al interesado para sus fines, es que la inversión se hará efectiva, lo que regulariza la permanencia en el país del extranjero inmigrante, por consiguiente, si éste se ausenta definitivamente antes de vencerse los seis meses señalados, sin hacer la inversión, es claro, también que renuncia al carácter de inmigrante, por lo que no puede obligársele a hacer inversión alguna, ya que no habrá de permanecer en el país; y si ya no habrá inversión la consecuencia lógica es que la garantía subsidiaria ya no tiene función legal y debe ser devuelta al interesado. Toca 429/42/1^º Félix Moos.

Marcas, palabras que no pueden registrarse.—La fracción I del artículo 7^º de la Ley de Marcas alude exclusivamente a palabras del idioma nacional. La finalidad que persigue la Ley aplicable en el precepto invocado, es prohibir el registro de palabras genéricas, para evitar un indebido monopolio del léxico nacional que, de otra suerte, se suscitaría. No siendo “crush” palabra española, su registro no es violatorio de la Ley, pues la restricción establecida por ésta, es en la hipótesis de que la marca emplee un nombre o denominación genéricos, amparando un objeto incluido en el género o especie a que alude la denominación: esto es, la prohibición sólo surte efectos cuando concurren los extremos indicados; la ausencia de uno de ellos implica la inaplicabilidad de la citada norma jurídica. Toca 6120/41/2^º Guillermo Schiemann.

Militares anteriores a 1913.—A pesar de que el artículo 26 de la Ley de Retiros y Pensiones del Ejército establezca que el Ejército actual se considera creado desde el 19 de febrero de 1913, ello no quiere decir que se desconozca la existencia de un Ejército anterior al cual pudieron prestar servicio los militares que servían las instituciones del país. Toca 3119/42/1^º Amado L. Cristo Mireles.

Multas por infracciones a reglamentos Gubernativos, facultad para imponerlas.—El artículo 21 Constitucional constriñe el ámbito de acción de las autoridades administrativas al castigo de las infracciones a los reglamentos gubernativos y de policía, con multa o arresto hasta por treinta y seis horas. No basta que una autoridad desempeñe funciones administrativas para que esté capacitada para imponer multas por infracciones a los reglamentos expresados, sino que es necesario que el Reglamento a que pertenezca la disposición infringida sancione la infracción con multa y determine la autoridad que debe imponerla, y es del todo falsa la idea de que el artículo 21 invocado sea una disposición supletoria de los reglamentos gubernativos o de policía. Toca 4318/42/2^º Compañía Industrial Veracruzana, S. A.

Notificaciones, facultades del autorizado para oír en amparo.—La persona autorizada para oír notificaciones en los términos del artículo 27 de

la Ley de Amparo, no puede interponer por escrito el recurso de revisión. Toca 3657/42/1^ª Raúl Sánchez Altamirano. (V. Toca 3344/41/2^ª).

Permisos de ruta.—El interesado puede resentir perjuicios si se conceden nuevos permisos a personas distintas, pero para que la suspensión sea precedente se necesita que no afecte el interés general ni contravenga disposiciones de orden público, lo que sucede en la especie, pues es indiscutible que la mayor facilidad en las comunicaciones favorece el interés colectivo, y en esa virtud, no se puede impedir la expedición de esos permisos de ruta que se acuerdan para mejorar los transportes en esa vía, puesto que esto afectaría el interés general vinculado con ese mejoramiento. Toca 1856/42/2^ª Pedro Serrano y coagraviados. (V. Tocas 6891/39, 6145/40 y 567/42.

Posesión no puede probarse por inspección judicial.—Las diligencias de inspección ocular no son prueba adecuada para demostrar el hecho de la posesión, especialmente cuando se trata de inmuebles, supuesto que no tiene más objeto que el Juez mismo compruebe, por sus propios sentidos, la existencia de determinados hechos o circunstancias que en un momento dado se dice existen, y aun cuando la posesión ofrece situaciones de hecho, la misma no puede ser apreciada por una simple inspección transitoria, sino que requiere una observación y apreciación de carácter permanente, que no puede realizarse en una diligencia de duración tan limitada, como es la de que se trata. Toca 8894/41/2^ª Comunidad Agraria “La Higuera”.

Prórrogas para el pago de impuestos, revocación.—El hecho de que las prórrogas que las dependencias del Ejecutivo Federal conceden para el pago de los impuestos, sean una verdadera gracia, no quiere decir que la autoridad fiscal puede revocarlas sin que exista motivo justificado; pues en caso contrario no tendrían firmeza los acuerdos administrativos, que aun cuando provengan de una concesión graciosa, una vez otorgada, crea derechos en favor del agraciado. Toca 2840/42/2^ª Demetrio Salazar, Sucesión.

Puestos semifijos.—Los permisos concedidos por las autoridades administrativas para explotar casillas o puestos, que por su naturaleza son cambiables, siempre están sujetos, a ser revocados, cuando se acredite que perjudican los intereses de la colectividad. Toca 4820/42/2^ª Rafael Leyva.

Rastro, administración obrera.—Dicha Administración Obrera tiene el carácter de autoridad. Toca 4881/42/1^ª Gonzalo Escobar Cuarón.

Reglamento del pan, facultad para expedirlo.—A través del Reglamento de la Industria del Pan, se trata de satisfacer necesidades comerciales y necesidades sanitarias; las primeras son las que se refieren al costo del producto y a facilitar la libre concurrencia, y las segundas, son las que se refieren a la calidad del producto para su venta al público; y tanto en un caso como en el otro, la autoridad administrativa no usa de facultades reglamentarias porque carece de competencia. Las disposiciones en materia de comercio, o bien se establecen a través del Código de Comercio de acuerdo con la fracción X del artículo 73 de la Constitución, o bien se establecen como leyes reglamentarias del artículo 28 constitucional. El artículo últimamente citado no puede, como lo pretenden las autoridades, ser reglamentado por medio de un reglamento expedido por

el Ejecutivo, sino por una ley, según los términos del propio artículo 28 Constitucional, y esa ley sólo puede ser expedida por el Congreso de la Unión. Toca 2001/42/1^o Agustín Espinosa Alemán.

Reglamento de Policía y buen Gobierno.—Los ordenamientos de esa clase se han expedido con miras a satisfacer exigencias inaplazables de carácter general que no pueden quedar supeditados al interés particular de un individuo. Frente a esas medidas de policía no cabe hablar de derechos adquiridos ni de aplicación retroactiva de la ley. Toca 647/42/1^o Jacobo Ruperstain.

Resoluciones Agrarias. ejecución.—La colectividad está interesada en que se ejecuten en sus términos las resoluciones agrarias, esto es, que al ejecutarlas no se afecten tierras no comprendidas en ellas pues la indebida ejecución no sólo supone el desacato del mandamiento que trata de ejecutar, sino del procedimiento establecido por la ley para la exacta ejecución. Tampoco contraviene el beneficio disposiciones de orden público, sino que, por el contrario, tiende a salvaguardar los preceptos constitucionales y reglamentarios que se refieren a las resoluciones agrarias y a su ejecución. Y además, se causarían daños y perjuicios al quejoso de difícil reparación si se ejecutan los actos reclamados. Toca 268/42/2^o Platón Gómez.

Responsabilidad de terceros en la fabricación del alcohol.—Las fábricas quedan afectadas al pago de los impuestos de que trata la Ley de Alcoholes, aun cuando sean de terceras personas, debiendo entenderse por "Fábrica", únicamente el equipo industrial. El propietario de la finca es responsable cuando sabe que está fabricando alcohol clandestinamente o cuando se presume ese hecho de acuerdo con la Ley de la materia, pero para la aplicación de esta disposición legal deben acreditarse los extremos a que la misma se refiere. Toca 3010/42/2^o Ramón García.

Revisión extemporánea interpuesta por las autoridades responsables.—Si la revisión hecha valer por una de las dos autoridades responsables, contra el fallo del Juez de Distrito que concedió el amparo fué desechada, por haber sido interpuesta fuera del término legal, y la otra de esas autoridades, que interpuso la revisión en tiempo, manifiesta que hace suyos los agravios expresados por la primera autoridad, teniendo en cuenta que la revisión interpuesta por ésta no fué admitida, debe estimarse que, en realidad, la otra no formuló agravios y, por lo mismo debe desecharse la revisión aunque la haya interpuesto en tiempo. Toca 5742/38/2^o Compañía Mexicana de Agua Caliente, S. A.

Títulos profesionales, competencia para expedirlos en Puebla.—En virtud de que con fecha dieciséis de abril de mil novecientos diecinueve, la Legislatura local del Estado de Puebla expidió la Ley Reglamentaria del artículo 4^o constitucional, y de que dicha Legislatura dispuso que sólo el Gobernador del Estado podría expedir títulos para ejercer la profesión de médico, resulta incontestable que a partir de la fecha antes indicada, por la que se expidió la Reglamentación del ejercicio de las profesiones, la facultad que se concedió a la Escuela Libre de Medicina de Puebla por decreto de 4 de enero de 1915, no subsistió desde aquel momento. Toca 4605/42/1^o Pascual A. Hernández.